



JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., 05 JUN 2019

Sentencia N° 69

Radicado: 110013335-017-2019-002210
Demandante: Gentil Antonio Díaz
Demandado: Unidad para la Reparación y Atención a las Víctimas-UARIV
Tema: Solicitud ayuda humanitaria
Derecho presuntamente vulnerado: Petición

Hecho superado

No encontrándose causal alguna que pueda anular lo actuado y agotadas las etapas previas, se procede a dictar **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA** en la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **GENTIL ANTONIO DÍAZ**

CONSIDERACIONES

La solicitud El 23 de mayo de 2019, el señor Gentil Antonio Díaz instauró acción de tutela contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por estimar vulnerado su derecho constitucional fundamental de petición.

Pretende el tutelante que por intermedio de la presente acción, se ordene a la entidad accionada, resolver de fondo las peticiones radicadas el 05 de abril, 23 de abril y 25 de abril de 2019 en el cual solicitó se le haga entrega de la ayuda humanitaria e indemnización administrativa a la que considera tener derecho.

Hechos De acuerdo con la demanda los hechos pueden sintetizarse así:

1. El señor Gentil Antonio Díaz elevó petición ante la entidad accionada el día 05, 23 y 25 de abril de 2019, bajo los radicados No. 2019-711-671831-2, No.2019-711-1110072-2, No. 2019-711-1121922-2, No. 2019-711-1121922-2, respectivamente.
2. A la fecha de presentación de la acción, el accionante no había recibido una respuesta de a la solicitud.

Contestación de la autoridad accionada La autoridad accionada señala que mediante oficio No. 20197203391301 de 09 de abril de 2019 contestó la petición de fecha 05 de abril y en ella se le informó que se había resuelto lo solicitado con el radicado 20197201382781 de 05 de marzo de 2019, en el cual se analizó entre otros, el caso en particular encontrando que el hogar del accionante fue sujeto del proceso de identificación de carencias, logrando establecer que la atención solicitada le fue otorgada dentro de los últimos 229 días, destinados a satisfacer las necesidades frente a la alimentación básica, por el término de 12 meses conforme al carencia presentada, la cual no tiene carácter retroactivo, ni acumulativo.

Por otra parte informa que se dio respuesta a las peticiones de fecha 23 y 25 de abril de 2019, frente a la indemnización administrativas, esto, mediante el oficio No.20197204372641 de 30 de abril de 2019, en la cual se anexó la respuesta brindada con el oficio N. 20197204168061 de 26 de abril de 2019, donde establece que el accionante fue sujeto de identificación de carencias y conforme a la base de datos y de la revisión del registro Único de Víctimas, se determinó que ya fue objeto de indemnización administrativa el día 21 de septiembre de 2016, razón por la cual no puede ser

doblemente reparado, es decir no siendo posible generar un pago adicional para quien ya cobró la indemnización.(Fl.19-33)

Competencia. Este despacho es competente para proferir fallo de tutela de primera instancia, toda vez que los hechos que motivaron la solicitud ocurrieron en la ciudad de Bogotá y la misma se encuentra dirigida contra una entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991, 1º del Decreto 1382 de 2000 y Decreto 1983 de 2017.

Legitimación por activa. La acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre, cuando sus derechos constitucionales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y excepcionalmente por los particulares.¹

En el presente asunto la acción de tutela es presentada en nombre propio por el señor Gentil Antonio Diez, en procura de la defensa del derecho fundamental de petición.

Legitimación por pasiva. El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Decreto.

En el caso, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas-UARIV, quien actúa como accionado dentro del trámite de la referencia, pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público de orden nacional y, en esa medida, goza de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente proceso de tutela.

Inmediatez: El principio de inmediatez de la acción de tutela está instituido para asegurar la efectividad del amparo y, particularmente, garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución y demás normas reglamentarias, así como en la jurisprudencia de esta Corporación. Por lo tanto, el transcurso de un lapso desproporcionado entre los hechos y la interposición del amparo tomaría a la acción de improcedente, puesto que desatendería su fin principal.

Al respecto, el señor Gentil Antonio Díaz radicó peticiones el 05, 23 y 25 de abril de 2019 en el cual solicitó se le haga entrega de la ayuda humanitaria e indemnización administrativa a la que considera tener derecho. Ante la ausencia de contestación, interpone la presente acción el **23 de mayo de 2019**, lapso razonable de conformidad con la jurisprudencia constitucional.

Subsidiariedad: En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional adoptada en la materia, y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.

¹ El inciso segundo del Artículo 10 del Decreto señala que también puede ser ejercida directamente por la persona afectada o por medio de un representante o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

Tratándose de población desplazada, la Corte Constitucional ha indicado que debido a las características propias de la acción de tutela, es el mecanismo judicial idóneo para solicitar la protección de sus derechos constitucionales fundamentales. En esa medida, pese a que existan otros mecanismos de defensa judicial, los mismos se toman ineficaces al momento de garantizar el pleno goce de los derechos constitucionales fundamentales en atención a la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento, por lo que no es posible exigir el agotamiento de los recursos ordinario.

Problema jurídico En esta oportunidad corresponde determinar si por parte de la entidad accionada, se ha vulnerado el derecho fundamental de petición invocado por la accionante, al no contestar dentro del término legal el derecho de petición instaurado el 05,23 y 25 de abril de 2019.

El concepto de carencia actual de objeto por hecho superado Como es por todos bien sabido, la acción de tutela fue consagrada por el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante su violación o amenaza por parte de cualquier servidor público o de un particular en los casos establecidos en la ley.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva la acción de tutela se superó o cesó, ya sea antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso del mismo, en estos eventos la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente lo siguiente:

"[L]a Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de objeto se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado. Así las cosas, la primera hipótesis "se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado² en el sentido obvió de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela"³. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. En otros términos, la omisión o acción reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. También se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia"⁴.⁵

Así las cosas, cuando la acción carece de objeto por haberse cumplido el propósito para el cual fue instaurada, nos encontramos frente al concepto carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que no habría lugar a impartir orden alguna para la protección del derecho invocado, por cuanto ha cesado su vulneración.

Solución del caso concreto

Resultó probado en el expediente que el 05, 23 y 25 de abril de 2019, el señor Gentil Antonio Díaz presenta ante la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, un derecho de petición solicitando la entrega de la ayuda humanitaria. (Cfr. 18,10 y 12).

Al contestar la presente acción, la UARIV afirma que ha contestado la solicitud elevada por el accionante, razón por la que solicita se nieguen las pretensiones de la tutela.

² Nota interna de la Sentencia T-011 de 2016. "[8] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de 2006, en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales, según pudo verificar la Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados al momento de la revisión del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la acción de tutela perdía su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse configurado un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte resolutoria de la sentencia. Así mismo, en la sentencia T-630 de 2005², en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que "si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar." Igual posición se adoptó en la sentencia SU-975 de 2003³, en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado".

³ Nota interna de la Sentencia T-011 de 2016 "[9] Sentencia SU-540 de 2007".

⁴ Nota interna de la Sentencia T-011 de 2016 "[10] Entre otras, Sentencias T-1207 de 2001, T-923 de 2002, T-935 de 2002, T-539 de 2003, T-936 de 2002, T-414 de 2005, T-1038 de 2005, T-1072 de 2003, T-428 de 1998"

⁵ Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 2016.

Accionante: Gentil Antonio Díaz
Accionado. Unidad Administrativa Especial para la atención y Reparación integral a las Víctimas-UARIV
Radicado: 11001335017 2019-00221
Acción de Tutela

Revisados los documentos allegados a la actuación, se observa que con el oficio No. 20197203391301 de 09 de abril de 2019 contestó la petición de fecha 05 de abril informando que se había resuelto lo solicitado con el radicado 20197201382781 de 05 de marzo de 2019, estableciendo que la atención solicitada le fue otorgada dentro de los últimos 229 días, destinados a satisfacer las necesidades frente a la alimentación básica, por el término de 12 meses, la cual no tiene carácter retroactivo, ni acumulativo.

Por otra se encontró que se dio respuesta a las peticiones relacionadas con la indemnización administrativa, esto, por medio del oficio No. 20197204372641 de 30 de abril de 2019, en la cual se anexó la respuesta brindada el 26 de abril de 2019, donde estableció que al accionante le fue reconocido el pago de la indemnización administrativa el día 21 de septiembre de 2016, razón por la cual no puede ser doblemente reparado.

Lo anterior fue enviado a la dirección del accionante por medio de la empresa de mensajería 472 con número de guía No. RA105246149CO de 09 de abril de 2019 y RA113750694CO de 30 de abril de 2019 (Fl. 21 vto.)

Por lo enunciado, es claro que en el presente caso se ha cumplido el propósito para el cual fue interpuesta la acción de tutela, en consecuencia el despacho se abstendrá de tutelar el derecho fundamental de petición al encontrar que se ha configurado la teoría de carencia de objeto por hecho superado, por cuanto se encuentra acreditado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas profirió respuesta de fondo a la petición incoada por la accionante no sin antes advertir a la entidad accionada, que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en los hechos que motivaron la presente tutela.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **JUEZ DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- NO TUTELAR el derecho fundamental de petición, invocado por el señor **GENTIL ANTONIO DÍAZ**, por haberse configurado el hecho superado.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la accionada y al accionante, por el medio más expedito, en el término previsto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO.- Si este fallo no fuere impugnado, envíese el expediente al día siguiente a la Corte Constitucional, para efectos de su eventual revisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, en caso que la acción sea excluida de una eventual revisión por parte de la H. Corte Constitucional, se procederá al archivo inmediato del expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

LUZ MATILDE ADAIME CABRERA
Juez

8/7